

Clandestinidad y consolidación insurgente:

la gobernanza rebelde del M-19 en la Colombia urbana

Francis O'Connor

Artículo originalmente publicado como: O'Connor, Francis. 2023. 'Clandestinity and Insurgent Consolidation: The M-19's Rebel Governance in Urban Colombia'. *Political Geography* 105 (August): 102930. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2023.102930>.¹

Nota: Por favor, no cite la versión española del artículo, por favor cite el artículo original, Gracias.

Sumario:

Comúnmente, los movimientos insurgentes se han reubicado en áreas rurales aisladas, con una presencia estatal débil, donde su seguridad, garantizada por un entorno hostil, les permite llevar a cabo ataques. Sin embargo, algunos grupos han optado por basar predominantemente sus movilizaciones armadas en ciudades con riesgos de seguridad mucho mayores, donde se ven obligados a hacerlo movilizándose clandestinamente. La clandestinidad a menudo se considera un impedimento para la consolidación insurgente. Este artículo explora las formas de gobernanza rebelde adoptadas por el M-19 en Colombia para construir redes de vínculos sociales necesarios para insertarse en entornos urbanos. Destaca un caso de gobernanza rebelde urbana sin control territorial, ampliando así el alcance de la literatura sobre gobernanza rebelde. Aborda la variación espacial de la insurgencia del M-19 analizando sus experiencias divergentes de movilización clandestina en Bogotá y Cali, así como una breve ventana donde realizó más movilización urbana pública. Se basa en entrevistas cualitativas realizadas con

¹ El artículo original traducido del inglés por Natalia Suarez Marin.

exmilitantes en Bogotá en 2018, y una extensa codificación cualitativa de fuentes primarias de archivo del M-19.

1. Introducción

Está ampliamente aceptado que “la búsqueda de una guerra irregular depende del apoyo continuo de al menos algunos civiles” (Wood, 2008, 543). También está establecido que para que tales patrones de apoyo se consoliden, los insurgentes deben ser reconocidos como actores legítimos, y que es necesario que exista un cierto grado de confianza recíproca entre los militantes y sus partidarios. Fundamentalmente, la legitimidad es un proceso relación relacional interactiva y no una cualidad innata (Demetriou, 2007), que requiere la búsqueda y mantenimiento de redes de relaciones sociales entre los insurgentes y sus bases. Sin embargo, temerosos de la vigilancia y la infiltración, los grupos armados a menudo operan con extrema precaución cuando interactúan con bases existentes y potenciales, una precaución que puede inadvertidamente resultar en el desarrollo de una distancia social en vistas a su base, lo que podría causar desapego y aislamiento de los insurgentes. Estos imperativos contradictorios entre la seguridad y un ámbito más amplio de apoyo, puede conducir a lo que se ha llamado el “dilema de las vanguardias” (Moriarty, 2010, 477). Una tensión entre la necesidad de operar en las sombras para mantener la capacidad operativa (McCormick & Owen, 2000) y la necesidad de movilizarse públicamente para que la naturaleza política de las acciones insurgentes sea reconocida. Este tire y afloje es particularmente pertinente para la movilización urbana ya que

es más riesgosa que su contraparte rural, debido a la fuerza de los organismos de seguridad, la vigilancia estatal y la condensación de tiempo y espacio (ver Bell, 1990; Gillespie, 1980; Guillén, 1973, pp. 237–41; Hobsbawm, 1994, pág. 169; Le Blanc, 2013; Pizarro Leongómez, 2021, pp93-95, Stanilad, 2010, 1624).

Décadas de investigación sobre movimientos sociales han confirmado que el reclutamiento a grupos militantes urbanos comúnmente se desarrolla a lo largo de redes vinculares basadas en la confianza y en la anticipación de obligaciones recíprocas en materia de seguridad y soporte. Estos vínculos a menudo se derivan de redes politizadas no violentas existentes, movilizadas antes de la adopción de la violencia insurgente (Boulanger Martel, 2022a; Della Porta, 1988; Jentsch y Masullo, 2022; McAdam, 1986; Staniland, 2014), así como en vínculos familiares o personales (Medellín Pérez, 2018, 37; Parkinson, 2013; White & White, 1991). Estas redes fragmentadas pueden luego ser estratégicamente movilizadas y conectados a través del 'bricolaje' (Boulanger Martel, 2022b) o el 'corretaje' (Tilly, 2003). Sin embargo, debido a la vulnerabilidad de la movilización urbana a la infiltración por parte de agencias de seguridad y a prácticas de compartimentación insurgente, debido las cuales los militantes sólo están en contacto con otros en su celda o unidad inmediata, puede ser difícil expandir la base del movimiento una vez que se agotan las redes inmediatas. En consecuencia, este artículo muestra que los movimientos insurgentes participan en formas incipientes de gobernanza rebelde como medio para generar vínculos sociales ulteriores más allá de sus redes existentes. La provisión de servicios necesarios (por ejemplo, vigilancia local o intervención en conflictos laborales o de vivienda) facilita "momentos de encuentro" (O'Connor & Oikonomakis, 2015), generando vínculos en el entorno social inmediato de los insurgentes. Estos vínculos pueden evolucionar

desde afiliativos hasta otros más débiles, hasta eventualmente llegar a los vínculos fuertes que generalmente se requieren para que haya apoyo activo o reclutamiento a favor de un grupo insurgente. Aunque no siempre existe una relación causal entre la provisión de gobernanza rebelde y apoyo popular ², dicha provisión a menudo mejora la legitimidad moral y pragmática de los movimientos insurgentes (Worrall, 2017, 715), brindando la oportunidad de generar redes más amplias de vínculos sociales que conforman las bases insurgentes.

Basándose en numerosos datos primarios, incluidas entrevistas con excomandantes, militantes y partidarios (Ver Apéndice 1), este documento toma la movilización urbana del M-19 (1974-1990) como caso de estudio para examinar la relación entre clandestinidad, control territorial (o su ausencia), y la gobernanza rebelde. Su pregunta central es cómo los movimientos insurgentes fomentan los vínculos sociales necesarios para el desarrollo de su base cuando se los obliga a operar clandestinamente y sin el control territorial en entornos urbanos. Este artículo realiza una serie de consideraciones teóricas y aportes empíricos. En primer lugar, proporciona evidencia teóricamente para mostrar que los peligros previstos por los teóricos insurgentes de la movilidad urbana (aniquilación temprana por parte de las fuerzas de seguridad) y por los teóricos de los movimientos sociales (clandestinidad compartimentada que conduce al aislamiento) pueden mitigarse adquiriendo una base de apoyo, derivada en parte de la provisión de formas de gobernanza rebelde. En segundo lugar, identifica una limitación significativa en la literatura sobre

² Véanse, por ejemplo, las impopulares prácticas educativas locales impartidas por el Partido Comunista Chino (PCC) (Stewart, 2021, 37).

gobernanza rebelde debido a su insistencia en la importancia de que los movimientos insurgentes posean el control territorial como un condicionante para la amplitud de su área de influencia.

Utilizando el caso del M-19, este artículo destaca que los movimientos pueden proporcionar, y de hecho lo hacen, formas incipientes de gobernanza sin control territorial, incluso cuando se ven obligados a movilizarse clandestinamente o, de manera contradictoria, en una zona gris de “clandestinidad pública” (Entrevista 1). Contrasta las experiencias divergentes del M-19 en Bogotá y Cali: en Bogotá y sus alrededores el M-19 operaba abrumadoramente en la clandestinidad sin control territorial, mientras que en Cali gozó de períodos limitados con una presencia mucho más fuerte que se asemejaban al entendimiento convencional del control territorial a la vez que tuvo períodos de movilización clandestina. Los casos sirven así como ejemplos ilustrativos de diferentes formas de control y cómo este afectó los esfuerzos del M-19 para crear una base que lo apoyara. Como valoración ulterior de la relación entre clandestinidad-control- gobernanza rebelde, aborda un breve interludio de movilización pública no clandestina a través del establecimiento de los Campamentos de Paz en 1985 tanto en Bogotá como en Cali (Ver Medellín Pérez, 2018, 88–89; Vásquez Perdomo, 2005, 208–9). Finalmente, presenta un fuerte estudio de caso empírico de las prácticas de gobernanza rebelde y redes de apoyo del M-19, corrigiendo un desequilibrio en gran parte del (excelente) trabajo publicado sobre la M-19 que ha tendido a centrarse en su desmovilización en lugar de su insurgencia (Florez-Morris, 2007; García Durán, Grabe Loewenherz y Patiño Hormaza, 2008; Söderström, 2016)

El artículo analiza primero la literatura relevante sobre las redes de apoyo a la insurgencia, destacando el sesgo rural de gran parte del trabajo sobre insurgencia y criticando el descuido de la insurgencia urbana en la literatura sobre gobernanza rebelde. Continúa abordando conceptualmente cómo las formas incipientes de gobernanza rebelde pueden implementarse mediante movimientos que operan clandestinamente y sin control territorial, y cómo esto puede llevar a la generación de vínculos sociales para consolidar una base de apoyo. A continuación, describe los datos y métodos utilizados, para proceder a presentar brevemente el M-19. Basado en estudios de caso detallados centrados en Cali (Holguín Pedroza, 2014) y Bogotá (ver Medellín Pérez, 2018), los compara como contextos espaciales distintos, proporcionando así una ilustración de la variación dentro de los casos y las inconsistencias espaciales de la movilización insurgente. Concluye esbozando la relevancia contemporánea de la gobernanza rebelde y la construcción de bases de apoyo urbanas, discutiendo las dificultades inherentes a la movilización urbana y a la generalización de los hallazgos, antes de sugerir una serie de pistas para futuras investigaciones.

2. Discusión teórica

Las trayectorias insurgentes convencionales vieron a las élites políticas urbanas retroceder a zonas rurales aisladas donde podían operar relativamente libres del control y la vigilancia estatal (McColl, 1969; O'Connor & Oikonomakis, 2015; Wickham-Crowley 1993). Gran parte de la literatura sobre interacciones insurgentes con sus redes de apoyo se deriva de casos paradigmáticamente rurales. Esto es ciertamente verdadero en el caso de los clásicos manuales insurgentes y manuales de las campañas rurales exitosas en China (Mao Tse-Tung, 2015), Cuba

(Guevara, 2002) y Vietnam (Giáp, 1970), los cuales se contrastan con el muy mitificado, pero breve y relativamente vago, *'Mini-manual del guerrillero urbano'* de Carlos Marighella (2002).

A pesar de que la subsiguiente emergencia de estudios sobre terrorismo y el trabajo de los movimientos sociales sobre violencia se han centrado predominantemente en pequeñas redes violentas subterráneas de base urbana (Crenshaw, 1981; Della Porta, 1995; Wiktorowicz, 2005), esto no se extendió a campañas insurgentes más amplias con componentes urbanos. El campo más reciente de la gobernanza rebelde también se basa en casos predominantemente rurales donde los movimientos insurgentes se jactaban de control territorial sustancial en Colombia (Arjona, 2016), en Sri Lanka, la República Democrática del Congo y Sudán del Sur (Mampilly, 2011) y Uganda (Kasfir, 2005). Sin embargo, la insurgencia urbana no es un fenómeno nuevo, como lo evidencian las guerrillas urbanas latinoamericanas de finales de los años 60 y principios de los 70, como los Tupamaros en Uruguay y los Montoneros en Argentina (Le Blanc, 2012), así como casos de insurgencia urbana en el Norte de Irlanda (Bell, 1990; Ó Dochartaigh, 2022; Sluka, 1989; White & White, 1991), muchos de los cuales también implicaron formas de gobernanza rebelde.

El surgimiento del subcampo de gobernanza rebelde en el estudio de las guerras civiles ha permitido un valioso alejamiento de las minucias del combate insurgente para abordar repertorios insurgentes más amplios. La gobernanza rebelde ha sido resumida como “el conjunto de acciones que realizan los insurgentes para regular la vida social, política y económica de los no combatientes durante la guerra” (Arjona, Kasfir y Mampilly, 2015, 3). A primera vista, la gobernanza rebelde parece particularmente adecuada para abordar los movimientos insurgentes

urbanos. A diferencia de las campañas de guerrilla rural que a menudo surgen en regiones con baja densidad poblacional, los movimientos urbanos, por definición, ocurren en localidades con alta densidad de población. Esto asegura que cualquier esfuerzo insurgente por proporcionar la prestación de servicios o la redistribución de recursos resulta ser, espacialmente, más accesible a más personas y, porque las actuaciones urbanas tienen mayor cobertura por los medios que otras semejantes en el campo, es probable que tengan una mayor resonancia mediática.

Gran parte de la literatura predominante sobre gobernanza rebelde está limitada por su dependencia conceptual al control territorial insurgente como una condición de alcance para formas de gobernanza insurgente (Malthaner & Malešević, 2022, 5). Basándose en el marco teórico de Kalyvas (2006), Kasfir define el control territorial como “la capacidad de un grupo rebelde de mantener alejados a sus enemigos de un área específica” (Kasfir, 2015, 26). Arjona aclara además que el marco de gobernanza rebelde “no busca explicar el orden social en zonas donde las organizaciones armadas no quieren controlar el territorio” (2016, 13). Trabajos más recientes han redoblado la importancia del control, observando cómo los rebeldes se involucran con la “población civil cautiva” (Mampilly & Stewart, 2021, 15; Ver Anders, 2020; Breslawski, 2021; Rubin, 2019; Stewart, 2018; Stewart y Liou, 2016; Welsh, 2022). Sin embargo, la mayoría de los movimientos insurgentes nunca obtienen control territorial, excluyéndolos, así como estudios de casos empíricos para probar y refinar los fundamentos conceptuales de la gobernanza rebelde.

A pesar de la creciente prevalencia del conflicto urbano (Brathwaite & Konaev, 2019), se ha argumentado durante mucho tiempo que “los insurgentes tienden a ser universalmente débil en las ciudades” porque es más fácil para las autoridades “vigilar y vigilar a la población” (Kalyvas, 2006, p. 133), y las zonas urbanas tienden a impedir la ocupación del territorio por parte de los insurgentes (Le Blanc, 2013, 799). A pesar de estas limitaciones, muchos movimientos en zonas urbanas sí intentan proporcionar formas de gobernanza rebelde, aunque con menos frecuencia ostentan control territorial. De hecho, la provisión de formas incipientes de gobernanza puede llevar a que los insurgentes se incrusten en las comunidades, generando legitimidad y, de hecho, pudiendo engendrar control territorial en lugar de derivar de él (Jackson, 2018, p. 25; Ledwidge, 2017, pág. 33; O'Connor, 2021, págs. 50–51; Waterman, 2022).

Otro problema con la insistencia en el control territorial es que el conflicto armado se desarrolla en un patrón territorialmente inconsistente (Gutiérrez Danton, 2022, 5–6; O'Connor, 2021, pág. 48; 'O Dochartaigh, 2013, 120; Waterman, 2022). Esto asegura que los niveles de control y las prácticas de gobernanza varían espacialmente, los insurgentes pueden poseer control territorial en una zona rural, estar en el proceso de ampliar activamente su presencia en otra región rural, mientras se encuentran en retirada en antiguas fortalezas, todo esto mientras participan en movilizaciones urbanas clandestinas o en comunidades de la diáspora con el fin de suplementar sus campañas rurales. La insistencia de la gobernanza rebelde en el control territorial como condición de alcance asegura que tan sólo puede abordarse la gobernanza insurgente en sus bastiones, proporcionando así un fragmento selectivo y potencialmente engañoso de sus esfuerzos más exitosos por construir gobernanza insurgente (O'Connor, 2022).

Los teóricos insurgentes han llegado a la conclusión de que los grupos armados deben demostrar su relevancia ante sus bases de apoyo aún cuando todavía operan clandestinamente (Ahmad, 1982, 249), *precediendo* así su control territorial. Como afirmó el Che Guevara, los movimientos insurgentes deben movilizarse “no sólo dentro del área liberada, sino también tener contactos conexiones en las áreas adyacentes. Precisamente a través de estas conexiones es posible penetrar en una zona para una futura ampliación del frente guerrillero” (2002, 81). En consecuencia, centrarse predominantemente en áreas de control territorial insurgente es centrarse sólo en una parte del territorio insurgente. Las áreas bajo dominio insurgente suelen comprender áreas “más complejas, a veces superpuestas, complementarias o conflictivas, y formas híbridas de dominación sobre partes de una población” (Malthaner & Malešević, 2022, 7) o se caracterizan por una gobernanza de múltiples niveles (Kasfir, Frerks y Terpstra, 2017). Una comprensión del control insurgente como algo más matizado y no simplemente parte de una dinámica de suma cero con el Estado, es clave para entender la gobernanza rebelde en zonas urbanas.

Como parte del equilibrio entre seguridad y capacidad operativa (McCormick & Owen, 2000), los movimientos basados en las ciudades tienden a depender más frecuentemente de movilización clandestina que sus homólogos rurales. Una característica clave de la clandestinidad es su ubicuidad en las experiencias insurgentes: la mayoría de los movimientos insurgentes surgen de redes clandestinas antes de su expansión pública. A veces la clandestinidad es una estrategia insurgente calculada, pero comúnmente la clandestinidad ocurre a raíz de la represión

de movimientos políticos no violentos. Gran parte de la literatura existente se centra en los elementos limitantes de la clandestinidad, centrándose en las espirales de declive del movimiento en lugar de casos de crecimiento del movimiento a partir de clandestinidad (della Porta, 1995; Zwerman, Steinhoff y della Porta, 2000)³.

La provisión de formas de gobernanza rebelde urbana es una forma de los movimientos insurgentes de insertarse en sus entornos socioespaciales inmediatos. Granovetter argumentó que “el arraigo [...] destaca [...] el papel de las relaciones y estructuras personales concretas (o “redes”) de tales relaciones para generar confianza y desalentar el crimen” (1985, 490). Para los movimientos insurgentes, los vínculos sociales generados a través de formas incipientes de gobernanza cumplen una función de puente con sus electores. En pocas palabras, la gente no puede apoyar a grupos con los que no tienen contacto y, a través de iniciativas de gobernanza, los insurgentes emergen físicamente de las sombras creando puntos de tangibles de contacto – aunque a menudo breve– con sus posibles bases. “Las redes [de vínculos sociales] cierran la brecha estructural entre los individuos y los movimientos sociales, y así acercan a las personas a oportunidades de movilización” (Passy, 2001, 175). Estos vínculos sociales inicialmente débiles pueden verse fortalecidos mediante la interacción repetida, y a medida en que potencialmente se convierten en vínculos sociales más fuertes, “pueden ayudar a superar barreras a la acción colectiva y fomentar la participación en conductas de alto riesgo mediante la creación de

³ Una adición notable a esta literatura es el trabajo de Finkel (2015), que examina la resistencia en los guetos judíos a la ocupación nazi. Sin embargo, a diferencia de la mayoría de las insurgencias urbanas, los casos examinados por Finkel tenían menos una dimensión política, ya que los nazis buscaban no aplastar un movimiento político en particular, sino que buscaba el exterminio del pueblo judío per se. Por lo tanto, el secretismo insurgente tuvo prioridad sobre cualquier proyecto político de corto o mediano plazo.

recompensas y castigos sociales” (Thurber, 2019, 975). Los lazos más fuertes sirven entonces como tendones que unen a los insurgentes a sus bases, y facilitan el surgimiento de un orden normativo compartido, repleto de responsabilidades recíprocas de los unos hacia los otros (O'Connor, 2021, págs. 41–43). Por lo tanto, desempeñan un papel clave de socialización/politización en la creación de nuevas identidades compartidas con públicos más amplios más allá de las redes personales de los miembros insurgentes, mitigando así los potenciales peligros de aislamiento insurgente inherentes a la movilización clandestina.

La gobernanza rebelde puede adoptar varias formas, comenzando por la más común con la provisión de mecanismos policiales para áreas o comunidades descuidadas por parte del Estado, intencionalmente o debido a la falta de capacidad estatal. (Mampilly, 2011, p. 17; Wickham-Crowley, 1990, 482). La imposición (a menudo violentamente) de un cierto grado de orden social beneficia al movimiento mismo, ya que resulta en menos motivos para que las fuerzas estatales invadan el área de apoyo a los insurgentes, y a que los civiles acojan con agrado una mayor seguridad y previsibilidad. Los vínculos sociales desarrollados a través de la actuación policial insurgente (p.ej. cuando un residente local contacta a un insurgente para informar sobre asuntos criminales) también sirven como conductos de información más amplia, permitiendo así a los insurgentes orientarse mejor en un entorno específico al centrarse en las desavenencias locales y en la identificación de aliados potenciales que sean poderosos localmente (Ver Arjona, 2016, 56). A esto le puede seguir una expansión hacia la prestación de otros servicios como el establecimiento de instituciones educativas o de salud; por supuesto, en ausencia de control territorial la institucionalización de tales servicios es un desafío. Incluso desde una posición de

clandestinidad, los grupos insurgentes pueden involucrarse en lo que Gutiérrez Dantón ha denominado defensa armada, y utilizan “su capacidad coercitiva para favorecer a las comunidades solidarias y mejorar, cuantitativa y cualitativamente, la prestación de servicios del Estado” (2022, 20). Esto puede suceder tan prosaicamente como una unidad de comando armado que ofrece protección a un electricista mientras conecta 'extraoficialmente' las casas a la red de alambrado público, o mediante la intimidación de funcionarios municipales selectos para extender servicios a un barrio concreto. Estas iniciativas permiten que los militantes urbanos permanezcan relativamente seguros mientras brindan servicios y construyen relaciones con sus bases.

Se pueden considerar las prácticas de gobernanza rebelde como constelaciones de lazos sociales entre grupos insurgentes y sus bases en entornos espaciales específicos. Las prácticas de gobernanza son espacialmente muy inconsistentes, variando entre lo rural y lo urbano, entre vecindarios y valles en el campo. Sin embargo, hasta la fecha el campo de la gobernanza rebelde ha descuidado conceptualmente el espacio; basándose en conocimientos de geografía social que sostienen que como “no existen procesos puramente espaciales, tampoco existen procesos sociales no espaciales” (Massey, 1995, p. 51), se puede considerar la integración espacial de la base de un movimiento insurgente (en un ciudad o barrio en particular) no simplemente como una cuestión casual de ubicación geográfica sino más bien como un proceso relacional que comprende vínculos sociales, influenciados pero no enteramente determinados por el entorno físico. Por lo tanto, se explica por qué la movilización insurgente en los entornos urbanos puede ocurrir, y de hecho ocurre, y cómo se consolida mediante formas de gobernanza rebelde. Aunque tales iniciativas de gobernanza son a menudo fragmentarias, se entrelazan gradualmente para

formar un orden normativo que vincula a los grupos armados y sus bases, donde la capacidad coercitiva de los actores insurgentes está restringida por sus obligaciones morales y por el deseo de mantener la legitimidad local (O Dochartaigh, 2022; Schlichte y Schneckener, 2015).

Por muy valiosas que hayan demostrado ser las perspectivas desde la geografía social para comprender mejor la dinámica espacial de los patrones de apoyo a la insurgencia urbana, también hay ciertos imperativos físicos que caracterizan la movilización urbana que vayan más allá de las constelaciones sociales, por ej. ciertas ciudades como Cali fueron más propicias para la insurgencia urbana debido a su proximidad a los bastiones rurales de los insurgentes, lo que les permitía a estos huir al campo cuando la presión se volvía intolerable en la ciudad. De hecho, algunos barrios dentro de las ciudades son más propicios para iniciativas insurgentes por su elevación o por la composición de sus edificios, por ej. construidos con piedra o ladrillos, en lugar de madera y tejas. En cualquier caso, si bien las ventajas políticas de la movilización urbana son claras, es una tarea ardua y, en palabras de un comandante del M-19,... “en la ciudad, sufrimos [...] pérdidas mucho más rápido, [...] en la ciudad morimos más fácilmente (Entrevista 1)”.

3. Datos y métodos

Este artículo se basa en diferentes fuentes de datos, principalmente un período de trabajo de campo en Colombia donde se realizaron quince entrevistas con ex militantes, comandantes y simpatizantes del M-19 en Bogotá en la primavera de 2018, como parte de un proyecto de investigación en el Centro de Investigaciones sobre la Paz en Frankfurt (Peace Research Institute

Frankfurt) ⁴. El trabajo de campo de seguimiento a esta ronda de entrevistas preliminares de entrevistas se vio interrumpido por la pandemia de COVID. La muestra de entrevistados estuvo compuesta por once hombres y cuatro mujeres; incluyó a cuatro militantes de base que participaron activamente en las actividades del movimiento durante diferentes periodos, y diez militantes de alto rango que ocuparon varios puestos de oficiales y comandantes durante periodos más largos. La lógica del proceso de muestreo buscó incluir tanto perspectivas internas como externas del movimiento mediante entrevistas tanto a miembros y simpatizantes, así como a rivales/aliados políticos que se involucraron con la movilización del M-19. Dicho esto, las perspectivas "externas" en este artículo se limitan a una única entrevista con un militante del EPL.

Se hicieron esfuerzos para equilibrar entrevistas con militantes que habían estado activos en diferentes zonas geográficas, por ejemplo, en Bogotá y Cali, así como en diferentes contextos espaciales, por ejemplo, guerrillas rurales y urbanas. Sin embargo, esto fue difícil de implementar sistemáticamente ya que la mayoría de los entrevistados habían estado activos en múltiples roles y regiones. Se contactó a los entrevistados mediante una combinación de muestro por bola de nieve y por oportunidad. En consecuencia, no puede considerarse ni como una muestra representativa específica geográfica, de género, o de rol. Las limitaciones en el manejo son consistentes con la investigación cualitativa sobre conflictos o movimientos armados porque el proceso de muestreo nunca está completamente dentro del control exclusivo del investigador (Malthaner, 2014, 182) ya que el acceso debe ser negociado con los entrevistados, se deben respetar las obligaciones éticas y se deben mitigar los desafíos logísticos (ver O'Connor, 2021,

⁴ Muchas gracias a mi amiga y mentora Gory Suarez por su invaluable orientación y apoyo durante este período de trabajo de campo.

págs. 14-15). Buscando ser lo más transparente posible sobre los fundamentos metodológicos de esta investigación, al mismo tiempo que se mantiene la seguridad de los entrevistados, los detalles de las once entrevistas citadas en este artículo se incluyen en el Apéndice 1.

Los datos de esta entrevista se complementan con un análisis intensivo de fuentes primarias del M- 19, incluidos informes de prensa, informes internos y comunicaciones (entre otros M-19, 1978; 1983; 1977) y todas las ediciones de la publicación del M-19 *Oiga Hermano* disponible en el archivo digital del Centro Nacional de Memoria Histórica⁵, para completar un total de 309 documentos primarios de diferentes tamaños, desde documentos de una sola página hasta otros de docenas de páginas de largo. Estos datos fueron codificados según dieciséis códigos diferentes, usando MAXQDA, centrándose en las interacciones del M-19 con sus bases, incluyendo diferentes formas de gobernanza rebelde, interacciones con otros movimientos e interacciones con el Estado. Los datos también fueron codificados espacial y cronológicamente, identificando el nivel más bajo de denominación geográfica como barrio urbano y calles, o pueblo rural. Finalmente, fueron analizadas y codificadas una serie de biografías, memorias y autobiografías de exmilitantes. (Grabe Loewenherz, 2000; Mariño Vargas, 2019; Patiño, 2017; Villamizar, 2002; Vásquez Perdomo, 2005), junto con varias entrevistas extensas realizadas durante su movilización en los años 1980 (Jiménez Ricárdez, 1986; Lara, 2002).

⁵ Muchas gracias a Jakob Meer por su destacada ayuda en la investigación en esta fase de recopilación y análisis de datos.

4. Breve presentación del M-19

El M-19 surgió a principios de los años 1970 como parte de la segunda ola de movimientos guerrilleros en un contexto nacional de malestar social masivo y descontento político. La primera ola de movimientos insurgentes, fundada en la década de 1960, se caracterizó por fuertes posiciones ideológicas: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) estuvieron estrechamente vinculadas a las ortodoxias marxistas del Partido Comunista Colombiano, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) alineado con una postura guevarista, y el Ejército Popular de Liberación (EPL) era de orientación maoísta. Estratégicamente los tres estaban comprometidos con la insurgencia rural (Chernick y Jiménez, 1993, 190–91; Pécaut, 2019, pág. 24).

El M-19 fue creado por varios militantes que habían sido expulsados o que abandonaron voluntariamente las FARC-EP, y en parte sustancial por elementos de la populista Alianza Nacional Popular (ANAPO), que quedaron consternados por el fraude electoral de las elecciones presidenciales de 1970 (Le Blanc, 2012, 112). Sus miembros tendían a tener una composición desproporcionadamente de clase media; una encuesta interna del M-19 en 1977 mostró que la mitad de sus miembros eran de origen pequeñoburgués (M-19, 1977; véase Boulanger Martel, 2022a, 8; Flórez-Morris, 2007) ⁶. El M-19 se destacó de sus homólogos revolucionarios por su compromiso con la movilización urbana, y por su idiosincrático discurso – para la época y el contexto político – ideológico. En primer lugar, como sucintamente afirmó el pensamiento del M-19 el excomandante Navarro Wolff: “la selva con todo lo que ella conlleva en términos de

⁶ El reclutamiento rural tendía a resultar en un rango más amplio de clases sociales, incluyendo muchos campesinos pobres (Entrevista 2)

aislamiento, es el mejor lugar para sobrevivir, pero el peor para triunfar” (en Jiménez Ricardo, 1986, 100)⁷. En segundo lugar, rechazó activamente la abstracción política y el dogmatismo de los grupos revolucionarios existentes. Promovió lo que concebía como una ideología local apropiada para el contexto, centrada en el nacionalismo colombiano construido en torno a la figura de Simón Bolívar, la democracia y el antiimperialismo, en lugar de cualquier doctrina izquierdista específica (O'Connor y Meer, 2021, 132-33). Su postura no sectaria facilitó mayor unidad y cooperación con otros movimientos revolucionarios (O'Connor & Meer, 2021, 138-39; Villamizar, 2002, 329). Se centró en técnicas de comunicación innovadoras, y dio prioridad a actos simbólicos de propaganda armada que atrajeron la atención nacional e internacional como el robo de la espada de Simón Bolívar, la incautación de una enorme cantidad de armamento del ejército en la víspera de Año Nuevo de 1978, la toma de rehenes diplomáticos internacionales durante un asedio a la embajada de República Dominicana en 1980, y lo más controvertido (y posiblemente perjudicial para su reputación) la toma del Palacio de Justicia en 1985. Combinó estos “ataques espectaculares” con otros populares a nivel local tal como el robo de bienes básicos como leche y ropa para distribuirlos en los barrios pobres, así como campañas integrales de movilización urbana en apoyo a los movimientos por vivienda, huelgas sindicales, y por periodos de tiempo en Cali, una forma de administración urbana paralela. Todas estas actividades en su nivel más básico generan nuevos vínculos sociales entre los movimientos insurgentes y sus bases. Es importante destacar que, a partir de 1977, el M-19 también participó en una dinámica campaña de guerrilla

⁷ El ELN hizo algunos esfuerzos para movilizar una presencia guerrillera urbana, particularmente en Barrancabermeja, y las FARC-EP establecieron más tarde un frente urbano *Red Urbana Antonio Nariño* mayoritariamente activa en Bogotá. Gracias a José Antonio Gutiérrez Danton por señalar esto.

rural, donde disfrutó de algunos éxitos militares, especialmente en la batalla de Yarumales en 1984. Se adhirió a la estrategia de concentrar sus fuerzas en grupos relativamente grandes y de enfrentarse al ejército, antes de reagruparse y enfrentarlo nuevamente en otro lugar (Entrevista 2), lo que le impidió consolidar el crecimiento de bases territoriales rural de largo plazo como si lo hicieron grupos como las FARC-EP. Sin embargo, en determinadas zonas en el sur del país, funcionó como la única autoridad reconocida ante la relativa ausencia del Estado, donde patrullaba abiertamente armado y en uniforme, e implementó un sistema de justicia insurgente que infligió castigos, incluidas ejecuciones (Entrevista 3). Incluso estableció escuelas y redes de servicios rudimentarios de salud en Caquetá y Huila (Entrevistas 1 y 2). El M-19 se desmovilizó en 1990, antes de pasar a desempeñar brevemente un papel enorme en la vida política de Colombia a principios de la década de 1990 a través de su partido sucesor, Alianza Democrática M-19, para luego pasar a perder relevancia política (Boudon, 2001; Boulanger Martel, 2022a; Guáqueta, 2007; Söderström, 2016).

4.1 Clandestinidad en el M-19

La clandestinidad dentro del M-19 adoptó dos formas: una compartimentación dentro del movimiento, diseñada para limitar infiltración de agentes estatales, así como una visión más matizada de la clandestinidad de cara a su base. Aunque la compartimentación por motivos de seguridad era necesaria, también dificultó que los simpatizantes activos realmente se unieran al movimiento en ausencia de vínculos sociales preexistentes (Ver Boulanger Martel, 2022b; Medellín Pérez, 2018, 32). En pocas palabras, si no se conocía a alguien del movimiento era difícil acceder a él. Esta aproximación excesivamente cautelosa se volvió a abordar en su Sexto

Congreso Nacional en noviembre de 1977, cuando los líderes alentaron un mayor contacto con sus bases. Esta última forma de movilización clandestina hace eco de análisis revolucionarios que enfatizaban la paradójica importancia de llevar “una existencia consistentemente clandestina con el apoyo de una población favorable en los barrios donde la policía y el ejército serán mal informados y acosados por todos lados”. (Guillén, 1973, p. 240). La movilización urbana del M-19 se centró en dos de las ciudades más grandes del país, Bogotá y Cali. En sus inicios años, reclutó en el medio universitario y a un subconjunto de activistas de la ANAPO , particularmente en una facción del partido ANAPO Socialista para su base incipiente (Boulanger Martel, 2022b, 29; Medellín Pérez, 2018, 36; Villamizar, 2002, 295). Desde el principio, el M-19 tomó muy seriamente las cuestiones de seguridad operacional y funcionamiento y la compartimentación. En su Segunda Conferencia Nacional, en octubre de 1973, tomó medidas rigurosas para mantener en secreto la identidad de sus miembros incluso unos de los otros (Villamizar, 2017, 356). Como explicó Vásquez Perdomo:

[...] “ya sabíamos cómo comportarnos, sabíamos lo que no debíamos saber, cómo proteger nuestra identidad real, nombre, apellido, residencia y contactos familiares. Vivíamos en la clandestinidad desde el principio”
(Entrevista 4).

Las reuniones se celebraban en cafés, donde los militantes se reunían bajo nombres ficticios y parcialmente disfrazados. Una miembro femenina explicó que usaba alisar su cabello rizado, ponerse gafas o sombrero y cambiarse el estilo de vestimenta, pasando de usar faldas a usar

pantalones (Entrevista 5). Sin embargo, esa compartimentación tenía límites, ya que muchos de los reclutas procedían de los mismos entornos radicales de estudiante o en el bachillerato, por lo que cuando los militantes se reunían, siguiendo estrictos protocolos de seguridad, simplemente se encontraban con personas que ya reconocían, anulando así el principio de secreto (Holguín Pedroza, 2014, 186). La mayoría de los militantes llevaban una especie de doble vida manteniendo sus puestos de trabajo y sus familias, comprometiéndose al mismo tiempo con el trabajo revolucionario (Medellín Pérez, 2018, 39). Esta doble vida fue llevada por muchos estudiantes, pero también por personas con carreras prestigiosas como decanos de universidades (Entrevista 3), o trabajos de clase media como maestros de escuela (Entrevista 1), funcionarios de bancos y hasta un capitán de policía (Entrevista 6). Esta existencia secreta continuaba hasta que los militantes fueran "quemados" cuando su doble identidad era conocida por las autoridades⁸, momento en el que fueron obligados a volverse completamente clandestinos y a abandonar cualquier apariencia de una vida normal, mudándose de casa segura a casa segura o, alternativamente, uniéndose a los frentes guerrilleros rurales.

Sin embargo, cuando el movimiento intentó llegar a las masas, necesariamente puso en peligro su seguridad. Una comunicación interna del M-19 lamentó que “para muchos camaradas, ‘abrirnos a las masas’ llevó que abandonen nuestras medidas de seguridad”. El mismo comunicado exhortó a los miembros a tener la máxima precaución al reclutar nuevos miembros

⁸ Durante las negociaciones de paz de 1984, varios militantes de alto rango se vieron obligados a convertirse en rostros públicos del movimiento. Cuando el proceso de paz se rompió poco después, se vieron obligados a volverse totalmente clandestinos o a marcharse a los frentes rurales (Entrevistas 6 y 7)

para evitar espías (M-19, 1977). En este proceso de búsqueda activa de apoyo popular se empleó una forma diferente de movilización clandestina, “una clandestinidad en medio del movimiento social [...] amparados por el movimiento popular. Una clandestinidad con mucho secretismo, pero también con mucho contacto con la comunidad” (Entrevista 6). Uno donde militantes 'quemados' que se trasladaban diariamente de casa segura en casa segura, en lugar de hacerlo de forma anónima, viviendo en apartamentos alquilados, se alojaban con familias que simpatizaba con el movimiento.

Uno de los desafíos clave de la movilización clandestina, como se describe en la literatura, es que los grupos armados se separan de sus bases, centrándose simplemente en la supervivencia y cayendo en una espiral ideológica obtusa (Della Porta, 1995, 132–33, Della Porta, 2013, 204–35; McCauley & Moskalenko, 2017, págs. 160–61; Zwerman, Steinhoff y della Porta, 2000, 95). Sin embargo, la clandestinidad del M-19 en medio de su base fue un antídoto contra el aislamiento de las masas. Como un exmilitante urbano explicó: las familias estaban orgullosas y felices de tener a alguien del movimiento en su casa – a pesar del riesgo personal para ellos –ya que “implicaba que [el movimiento] confiaba en ellos, se sentía seguro con ellos y les tenía cariño”. Sin embargo, estas tardes se convirtieron en interrogatorios amistosos, con los anfitriones curiosos por aprender tanto como posible sobre el movimiento (Entrevista 6). Es así en tan íntima proximidad, aunque repleta con algunas precauciones de seguridad, que se desarrolló lo que un alto oficial del M-19 llamó la “política del afecto” (Parra, 1987), esto es vínculos emocionales forjados en la fragua compartida del riesgo de represión estatal y tortura si fuesen capturados por las autoridades.

4.2 Gobernanza rebelde sin control territorial: clandestinidad total en Bogotá

El establecimiento de una base que esté dispuesta a arriesgar su vida como consecuencia de apoyar una insurgencia no se logra fácilmente. Los activistas del M-19, que operan desde su inicio dentro de un sistema clandestino de doble existencia había sentado las bases para que esta política del afecto desarrollar. Además de una estrategia de comunicación creativa que incluía realizar campañas publicitarias crípticas, la interrupción de las señales de televisión para transmitida directamente a las casas de los habitantes urbanos (Entrevista 15), y el uso de un lenguaje y un simbolismo con resonancia local (O'Connor & Meer, 2021, 143), el M-19 buscó involucrarse inmediatamente en formas de incipiente gobernanza para mejorar los medios de vida de las masas de inmigrantes de habitantes del campo a la ciudad que habían inundado las ciudades del país. A diferencia de las estrategias de movilización prolongadas de otros grupos revolucionarios de Colombia, el M-19 era consciente de que no provenía de las masas sino más bien de un pequeño grupo de cuadros de clase media, y que por lo tanto se veía obligado a establecer urgentemente un apoyo masivo (M-19, 1977). Para arraigarse mejor en su base, el M-19 realizó una reestructuración integral en su Sexta Conferencia Nacional, en noviembre de 1977, convirtiéndose en una organización político-militar (OPM). Un cambio que buscaba transformar lo que en ese momento era un movimiento de vanguardia en un movimiento de masas “capaz de movilizar y coordinar el apoyo masivo en la lucha armada. Para organizar el apoyo de las bases, especialmente entre los sindicatos, las asociaciones barriales, y grupos estudiantiles, la OPM necesitaba “militantes integrales”, es decir activistas que formasen parte de las organizaciones objetivo y sectores sociales” (Le Blanc, 2012, 128; ver M-19, 1978; Villamizar, 2002, 336-37).

Para ello, comandos M-19 secuestraron camiones de leche y distribuyeron la leche en barrios pobres. Los militantes enmascarados distribuían rápidamente los bienes incautados, participando en cierta propaganda para el movimiento antes de desaparecer de nuevo en el bullicio urbano. Aunque otros grupos revolucionarios criticaron tales gestos como simple populismo (Entrevista 10), fueron muy apreciados por los vecinos de barrios empobrecidos y rápidamente se convirtieron en una parte clave del repertorio del M-19. Estas acciones tipo 'Robin Hood' no se limitaron a la leche, pero también implicaron la distribución de otros productos básicos como azúcar, ropa, pan e incluso juguetes (ver García Durán, Grabe Loewenherz y Patiño Hormaza, 2008, 11)⁹. Dichas acciones no ocurrieron sin riesgos significativos, debido a la proximidad de patrullas policiales, y a menudo terminaron en tiroteos y captura de militantes. En un notorio incidente, un comando del M-19 fue rodeado mientras se encontraba en una misión redistributiva de leche abortada, en el barrio Diana Turbay de Bogotá en 1985, y los once militantes fueron asesinados por la policía, con pruebas que sugieren que al menos algunos de ellos fueron asesinados extrajudicialmente después de rendirse. (El Espectador, 2014).

En general, en lugar de añadir demandas políticas adicionales al tumulto social de mediados de los años 1970 y 1980, el M-19 prefirió promover aquellas ya existentes y abanderadas por la izquierda más amplia (Le Blanc, 2012, 122). Por ejemplo, el M-19 carecía de una relación orgánica

⁹ En las zonas rurales, tales acciones redistributivas reflejaron las necesidades locales de los habitantes. En Nariño, un guerrillero explicó cómo asaltaban almacenes que contenían productos como botas de agua, o pantaneras, que eran muy buscados por la gente en el campo (Entrevista 9).

con los sindicatos, pero buscó ganar apoyo en el sector al intervenir desde su posición de agente externo en huelgas y disputas laborales. El primer asesinato conocido del M-19 fue el de José Raquel Mercado, presidente de la Central de Trabajadores de Colombia (CTC). En el curso de los conflictos laborales a nivel nacional en 1976, el M-19 decidió unilateralmente secuestrar a Mercado para mejorar la influencia de los trabajadores en huelga en la disputa. Mercado era ampliamente visto como corrupto y, según el comandante del M-19 Jaime Bateman, tras un juicio revolucionario fue claro que “se había sometido completamente al imperialismo” (en Lara, 2002, pág. 215). Después de una consulta popular durante la cual se alentó a los trabajadores, a sindicatos, grupos de estudiantes y civiles comunes y corrientes a compartir su veredicto sobre Mercado escribiéndolo en las paredes de la ciudad, a Mercado le dieron pastillas para dormir y luego le dispararon (M-19, 1976; Villamizar, 2002, 317–23).

Una toma de rehenes similar también ocurrió en el caso del gerente general de Indupalma, Hugo Ferreira Neira, en 1977, quien, sin embargo, fue liberado indemne, después de que las demandas de los trabajadores fueron concedidas (Alternativa, 1977). Innumerables iniciativas de menor perfil en apoyo de las demandas sindicales fueron llevadas a cabo por el M-19, lo que le valió cierta simpatía popular por su voluntad de apoyar activamente las campañas de los trabajadores. El asesinato de Mercado en particular se superpone con prácticas de propaganda armada, por lo que podría decirse que se encuentra en los márgenes conceptuales del gobierno rebelde armado. La propaganda “busca transmitir un mensaje a la población, al gobierno enemigo, o ambos, mediante la aplicación de acciones coercitivas directas” (Brum, 2014, 390). Sin embargo, en el caso de Mercado, no fue sólo un acto simbólico de ataque a las elites sindicales

supuestamente cooptadas, sino una intervención directa para influir materialmente en una disputa en curso pertinente a la actividad de la base del M-19, por lo que también es una forma de gobernanza rebelde. Además, el M-19 involucró a sus bases en la determinación de su destino con su crudo “veredicto popular”, colocándolo en una categoría diferente a otros actos de propaganda armada que cometió, como el robo de la espada de Bolívar, los cuales se llevaron a cabo independientemente del electorado del M-19. De este modo, a pesar de la ambigüedad del caso específico de Mercado, los esfuerzos del M-19 por implementar un tipo de estrategia tosca, pero a veces efectiva de justicia revolucionaria para promover los intereses de sus hipotéticas bases puede considerarse una forma de gobernanza rebelde.

Su éxito más concreto en Bogotá y sus alrededores fue su participación en la lucha por la vivienda. En la década de 1970, las ciudades de Colombia se expandieron rápidamente a medida que los habitantes de las zonas rurales acudieron en masa a ellas para escapar de los conflictos y penuria en el campo. Solían instalarse en los llamados barrios piratas en “los cinturones de pobreza” (García Durán, Grabe Loewenherz, y Patiño Hormaza, 2008, 9) alrededor de las ciudades, ocupando parcelas de tierra y la construyendo viviendas improvisadas y luego, gradualmente, intentando regularizar los títulos de propiedad y el acceso a los servicios. El M-19 se sumergió en estas luchas, protegiendo a los activistas locales, coordinando las confiscaciones de tierras y la construcción de viviendas. En ocasiones, ellos hecho construyeron barrios enteros como Nuevo Corinto en Bogotá, en la localidad de Suba (Entrevistas 6 y 8) y Bolívar 83 en la cercana Zipaquirá (Jimeno, 2022). Normalmente, los militantes del M-19 que operaban clandestinamente utilizaban su conocimiento organizacional para ayudar a las comunidades a comunicarse con las alcaldías, a

identificar y asignar parcelas adecuadas para ocupar, y los defendían de la policía. Gran parte de esta organización se produjo de forma no armada, pero la capacidad implícita de violencia del M-19 fortaleció la posición de los residentes. Es importante destacar que estas iniciativas en Bogotá y sus alrededores se lograron sin ninguna forma de control territorial, con el M-19 trabajando con y a través de la gente, identificando problemas relevantes a nivel local, para luego abordarlos prácticamente en lugar de asumir un control más amplio sobre barrios específicos. Un exmilitante explicó que ‘todos los domingos se reunía toda la comunidad y trabajábamos el sistema de agua y alcantarillado’ (Entrevista 6). Una vez los barrios se establecieron, el movimiento continuó organizando a los residentes para continuar haciendo campaña para obtener más servicios de la ciudad y construyó escuelas y guarderías (Entrevista 8). Por lo tanto, el M-19 se había apropiado de las responsabilidades del Estado, el cual no estaba suficientemente comprometido o no dispuesto a proporcionar vivienda y servicios públicos en estos barrios. El M-19 participó en una mezcla de “abogacía armada”, obligando al Estado a cumplir sus obligaciones, junto con la “sustitución del Estado” al proporciona bienes colectivos por sí mismo (ver Gutiérrez Danton, 2022). El M-19 quedó así profundamente arraigado en estos barrios, disfrutando reconocimiento local y protección de las masas, pero no obstante operando desde las sombras en una forma de clandestinidad sin control territorial.

4.2.1. Gobernanza rebelde con control territorial parcial: clandestinidad pública en

Cali

La movilización inicial del M-19 en Cali tuvo muchas similitudes con la de Bogotá, pero evolucionó hasta diferir dramáticamente en escala y ambición. Cali disfrutaba de una importante ventaja

geográfica porque ser adyacente a la Cordillera Central, un ramal de los Andes colombianos, que proporciona condiciones ideales para movimientos insurgentes, y cerca del Valle del Cauca albergaba un bastión del M-19¹⁰ En consecuencia, el movimiento podría transportar militantes y suministros desde estas áreas seguras a la ciudad. Es importante destacar que para la estrategia del M-19, de llevar la guerra a la ciudad, el Valle del Cauca también está densamente poblado, combinando así condiciones geográficas y sociales favorables (ver Navarro Wolff en Jiménez Ricárdez, 1986). En los 1970s Cali se vio afectada por la ausencia de servicios públicos, pues, por ejemplo, el 44% de sus calles no estaban pavimentadas y el 34% de las casas no tenían acceso a un sistema de alcantarillado (en Holguín Pedroza, 2014, 179). La ciudad en general y sus barrios periféricos en particular, también habían experimentado años de movilización política previa a la llegada del M-19 a través de las acciones de organizaciones religiosas progresistas y una amplia gama movimientos y partidos socialistas clandestinos de fragmentados (Entrevista15). A partir de los finales de 1983, el M-19 tuvo una amplia presencia en dos grandes barrios pobres en las márgenes de la ciudad, Siloé y Agua Blanca. Para 1985, las unidades armadas del M-19 patrullaban abiertamente estos distritos uniformados. Cuando estudiantes de la Universidad del Valle, cercano foco revolucionario, abandonaron las aulas para unirse a la guerrilla, en lugar de partir hacia las montañas se unieron estas unidades guerrilleras urbanas (Entrevista 1). El distrito de Agua Blanca tenía entre 350.000 y 400.000 habitantes en ese momento, y aunque las afirmaciones del M-19 de servir como una forma de gobierno allí probablemente sean exageradas (Navarro Wolff en Jiménez Ricárdez, 1986), si tuvo enorme influencia y cierto grado de control

¹⁰ Para dar una idea de la fuerza del M-19 en la zona, junto con el Comando Ricardo Franco, se apoderó temporalmente de la ciudad industrial de Yumbo, cerca a Cali, el 11 de agosto de 1984 (ver Valencia, 2019)

territorial en partes tanto de Agua Blanca como de Siloé, permitiendo así una forma más ambiciosa de gobernanza rebelde urbana.

El surgimiento del M-19 en Cali fue bastante similar al de Bogotá. Sus reclutas iniciales procedían de las universidades y escuelas secundarias, que se concentraron en adquirir recursos y armas para el movimiento, junto con acciones simbólicas ocasionales como la ocupación de la Universidad Santiago de Cali en 1974 (Holguín Pedroza, 2014, 180–84). Estas redes clandestinas procedieron entonces a aventurarse en los barrios de la periferia.

Hipólito, un excomandante, explicó que llegaron a repartir leche en el barrio el Vergel, en Agua Blanca, una zona famosa por su pobreza desesperada con casas hechas con barro, bareque, cartón y tejas. De acuerdo con Hipólito:

“éramos 9 o 10, con armas pequeñas, pasamontañas y pañuelos del M-19 , [...], llegamos allí, dimos nuestro discurso, alzamos nuestra bandera y pancartas [...] y el pueblo, los ciudadanos, la población nos recibió con aplausos y cariño” (Entrevista 1).

Nuevamente, como en Bogotá, estas iniciativas fueron utilizadas por el movimiento para establecer vínculos sociales e insertarse en el barrio, para buscar simpatizantes locales e identificar lugares para esconder armas y documentos, con la seguridad de saber que los militantes siempre tenían una alternativa de huir a la seguridad de las montañas cercanas y los bastiones guerrilleros en el campo circundante, un lujo del que no disfrutaban en Bogotá.

La movilización en Cali se desarrolló de manera bastante más amplia que en Bogotá, especialmente en lo que respecta a cómo podría moverse el M-19 en el espacio urbano. Esto se puede ver en el ejemplo concreto del uso de pasamontañas por el M-19. El uso de cubiertas faciales es una técnica clave para ocultar la propia identidad, permitiendo así la búsqueda de una "vida dual" como militante y ciudadano común. Sin embargo, el uso de mascarilla supone una barrera entre el que la usa y su público objetivo, lo cual es un importante problema cuando se intenta generar confianza y legitimidad popular. La máscara no sólo oculta sino que también despersonaliza, transformando a quien la porta, de un individuo específico a un vehículo anónimo de violencia (Feldman, 1991, pág. 53). Y mientras el M-19 buscaba transformarse de vanguardia a un movimiento de masas, en su VII Conferencia Nacional en 1982, el comandante del M-19, Jaime Bateman, alentó a sus miembros a abandonar el uso de máscaras. Una tarde en particular en el barrio de el Vergel, en el distrito de Agua Blanca en Cali, después de una bienvenida especialmente cálida y de una invitación de los lugareños para permanecer permanentemente en el barrio, Hipólito, el comandante local, tomó la decisión de quedarse en lugar de retirarse a la clandestinidad. Esa misma noche él "ordenó a sus hombres que se quitaran las máscaras y [...] [que] permanecieran permanentemente en Agua Blanca" Recordó que se trató de "una decisión política porque claramente era más riesgoso [operar abiertamente]" (Entrevista 1). Esto los llevó a operar "una forma de vida pública clandestina" lo cual es una contradicción macondiana¹¹ [...]. Yo tenía que operar con presencia pública, permanecer activo, pero al mismo tiempo no permitir que nos atraparan" (Entrevista 1). Esta destacada experiencia de clandestinidad pública y

¹¹ Se refiere a Macondo, la ciudad ficticia en la novela de Gabriel Gracia Márquez

gobernanza rebelde urbana relativamente ambiciosa llegó a su fin a finales de 1985, cuando una enorme ofensiva militar y días de intensos combates urbanos, particularmente en Siloé donde la guerrilla había cavado trincheras y otras estructuras defensivas, obligaron a los los insurgentes a retirarse a la seguridad de los campos circundantes. Aparte de una importante pero fugaz ocupación militar de varios barrios de Cali barrios con sus aliados del Batallón América en 1986, el M-19 nunca estuvo en condiciones de recuperar una presencia territorial comparable en la ciudad.

4.2.2 Gobernanza pública rebelde: campos de paz en Bogotá y Cali

Además de estas distintas experiencias espaciales contrastantes de clandestinidad, hubo un período de tiempo particular en el que más movilización pública y gobernanza fueron posibles. Después de ganar las elecciones presidenciales en 1982, Belisario Betancur inició diálogos de paz con diversos movimientos revolucionarios del país, incluido la aplicación de una amnistía de 1982 que supuso la liberación de unos pocos cientos de guerrilleros del M-19¹² (ver Ramírez & Restrepo, 1988). El proceso culminó con un acuerdo firmado en Corinto en agosto de 1984 entre el gobierno de Betancur y el M-19¹³, dando lugar a un alto el fuego llevado a cabo de manera precaria. Después de un tenso interregno, y del ataque y asesinato de un número de altos miembros del M-19, este se relanzó a la insurgencia en junio de 1985 (ver Villamizar, 2019, 175). El M-19 utilizó esta extraña ventana de paz crónicamente violenta para lanzar concretamente sus planes de *ser gobierno*, desplazando así su atención popular hacia su capacidad para proporcionar

¹² Los números de prisioneros liberados varían de 215 a 467 (Ramírez y Restrepo, 1988, p. 95)

¹³ También fue firmado por el EPL. Véase Lara 2002, p. 363, para el texto completo del acuerdo firmado.

formas efectivas de gobernanza. Tras un paro nacional en a principios de 1985, el M-19 lanzó una red de Campamentos de Paz en barrios periféricos de Cali y Bogotá, que rápidamente se expandieron hasta alcanzar cuarenta campamentos en diversas ciudades (Navarro Wolff en Jiménez Ricárdez, 1986, 93). Estos campamentos duraron alrededor de dos meses y medio y fueron asentamientos improvisados en espacios abiertos, con algunos toldos para refugio del clima y algunos artículos de primera necesidad donados por miembros de la comunidad local. Sin embargo, su escala no era insignificante: un campamento en Ciudad Bolívar en Bogotá contaba con un dormitorio para unos 80 militantes (Medellín Pérez, 2018, 87). Estos campamentos fueron diseñados como espacios en los que el M-19 podría explicar las dificultades del proceso de paz en curso, resumir sus objetivos, y abordar directamente los problemas cotidianos – para gobernar – en el barrio (Entrevistas 1, 3 y 8). Debido a su naturaleza pública, otros actores progresistas no violentos como sacerdotes de la Teología de la Liberación también los frecuentaban (Medellín Pérez, 2018, 91). De este modo, se destacaba que la divulgación pública podría servir como multiplicador de los vínculos sociales en comparación con una movilización clandestina más cautelosa.

Incluso en un contexto tan abierto y con una interacción tan densa con el público, el M-19 continuó implementando medidas de seguridad. Una militante explicó que en su barrio Costa Rica, en la localidad de de Suba, al norte de Bogotá, el campamento de paz local estaba a dos cuadras de su casa, pero nunca se reveló como una militante allí, y sólo frecuentaba reuniones como una ciudadana común y corriente (Entrevista 8). Inicialmente los campos continuaron con los hábitos de la movilización clandestina antes de que fueran intencionalmente abiertos para

incluir una participación más amplia en sus asambleas de rutina con los habitantes locales (Holguín Pedroza, 2014, 209). Es importante destacar que los guerrilleros presentes estaban desarmados y no se permitían armas, pero los campos mantuvieron un carácter insurgente. El M-19 aprovechó la oportunidad para constituir las Milicias Bolivarianas, no armadas, las cuales recibieron entrenamiento básico y capacitación, destacando nuevamente cómo el contexto más público facilitó la construcción de vínculos sociales más difusos, muchos de los cuales evolucionaron hacia un compromiso más amplio después del cierre de los campamentos.

Las milicias abordaron los problemas locales identificados por los habitantes de las zonas. Como afirmó un ex miliciano: “nuestro trabajo era hacer lo trabajo que el Estado no hizo” (en Holguín Pedroza, 2014, 212). Los cuadros del M-19 y su milicia implementaron una amplia gama de actividades desde castigar a los delincuentes locales, intervenir en disputas internas, proporcionar seguridad en el transporte público, organización de visitas médicas y campañas de vacunación, la provisión de guarderías para niños, la pavimentación de caminos, el incremento de conexiones de alcantarillado la red eléctrica, y, por supuesto, la protección de los campamentos de elementos de las fuerzas de seguridad (Ver Holguín Pedroza, 2014, 208–23; Jiménez Ricardo, 1986, 13-16; Lara, 2002, págs. 276–78; Medellín Pérez, 2018, 86–98; Vásquez Perdomo, 2005, 208–209, entrevistas 1,3,6 y 8). Esto refleja la observación de Parkinson y Zaks de que la participación insurgente no se limita a portar armas (2018, 278), y muchos colaboradores locales tenían vínculos débiles con el movimiento, limitados a almacenar armas ocasionalmente o haciendo favores a miembros del M-19 (Medellín Pérez, 2018, 69).

Es importante destacar que estas iniciativas de gobernanza no fueron necesariamente construidas gracias a las armas del M-19, si no que fueron llevadas a cabo principalmente por los residentes locales, de quienes se entendía con claridad que contaban con el respaldo armado del del M-19 como sustento para su movilización. Esto otra vez coincide con el concepto matizado de defensa armada (Gutiérrez Dantón, 2022, 20). Sin embargo, cuando el proceso de paz se rompió, y después de intentos de asesinato de altos miembros del M-19 como María Eugenia Vásquez Perdomo y Antonio Navarro Wolff, se hicieron evidentes los riesgos de tal movilización pública. Como explicó un militante “todos los que estaban al frente de los campos, [ellos] estaban completamente identificados” (Entrevista 8), y a medida que las fuerzas de seguridad del Estado actuaron contra estos campos, mató y desapareció a decenas de activistas (Vásquez Perdomo, 2005, 210), obligando así a los militantes, incluidos muchos milicianos recientemente movilizados, a huir hacia a la relativa seguridad de los frentes rurales de la guerrilla. Los Campamentos de Paz fueron el cenit de la movilización urbana del M-19, y aunque el movimiento continuó sus acciones en varias ciudades, estas volvieron a tener un carácter más clandestino y reducido en escala. A pesar de su corta duración, su impacto y la penetración ulterior del movimiento en los barrios populares reafirman las dificultades relativas de la movilización clandestina en comparación con los contextos donde interacciones más abiertas y estables con la base son posibles.

5. Conclusión

La elección del ex guerrillero del M-19 Gustavo Petro como presidente de la República de Colombia en 2022 demuestra la continuada importancia política del movimiento para el destino

del país en las últimas décadas. A pesar de su tamaño en relación con otras fuerzas revolucionarias, el M-19 capitalizó su movilización insurgente para proyectarse en el ámbito de la conciencia política nacional, mucho más allá de cualquier amenaza militar real que jamás haya realmente planteado al Estado. Su popularidad política durante el período de su desmovilización, como lo demuestran los datos de las encuestas de la época, fue sustancial (en “Boletín Internacional: Pizarro Candidato Presidencial” 2014)¹⁴. Aunque el apoyo inicial a su partido político post-insurgente *Alianza Democrática M-19* se ha fragmentado y ha declinado (Boudon, 2001), el legado de su campaña armada nunca desapareció por completo. Este artículo ha dado un paso hacia la comprensión de cómo, a pesar de los problemas de seguridad, operativos y las restricciones a la movilización clandestina, el M-19 movilizó a unas bases urbanas, incrustándose en las vertiginosas ciudades colombianas. También muestra que las redes de socialización establecidas por el movimiento le permitieron arraigarse en entornos abandonados tanto por el Estado y, en cierta medida, por otros grupos armados revolucionarios. En el ámbito teórico, el artículo ha demostrado que el aislamiento y la insularidad de grupos armados en las zonas urbanas predichos por las teorías de los movimientos sociales no es inevitable. Incluso ante la ausencia de control territorial, al adoptar formas incipientes de prestación insurgente de servicios, los movimientos urbanos pueden generar exitosamente vínculos sociales más allá de sus redes existentes. El artículo cuestiona así la rígida adhesión al control territorial insurgente como condición ineludible para analizar la gobernanza rebelde, mostrando que el control territorial no es necesariamente una condición previa para la gobernanza los territorios insurgentes. Finalmente, al comparar las experiencias insurgentes en dos ciudades, introduce una

¹⁴ Gracias Francisco Gutiérrez-Sanín por su ayuda encontrando este documento

perspectiva espacial para dar cuenta de las inconsistencias geográficas en los patrones de apoyo insurgente, demostrando que el control territorial o la falta de ello es una herramienta conceptual demasiado obtusa para comprender las complejas diferencias de patrones de dinámicas de control superpuestos entre insurgentes y gobernantes.

Aunque estos argumentos teóricos se basan en el caso histórico del M-19, que se desmovilizó hace más de treinta años, son igualmente relevantes para comprender mejor las condiciones urbanas pasadas y presentes de los conflictos urbanos. Los movimientos insurgentes urbanos que logran obtener apoyo local y ser así legitimados, puede resultar resiliente y presentar desafíos políticos a los gobiernos en ejercicio diferentes a aquellos de los movimientos rurales debido a su resonancia más amplia, el acceso comparativo a los medios de comunicación, a y limitaciones a las medidas de contrainsurgencia del Estado (Staniland, 2010). En un nivel más refinado de análisis, las prácticas de construcción de vínculos sociales por parte de movimientos insurgentes también se superponen con los esfuerzos de reclutamiento de los movimientos extremistas violentos en sociedades occidentales, los cuales van desde la prestación de servicios las llamadas zonas nacionales liberadas de extrema derecha previstas por los neonazis alemanes (Miller-Idriss, 2019, 41–42). A pesar su abandono por parte del campo de los estudios de la gobernanza insurgente, la insurgencia urbana es un fenómeno continuo, que abarca desde las campañas anticoloniales históricas en ciudades como Argel y Dublín, a casos más recientes como el levantamiento urbano kurdo en Turquía en 2015 y la persistente guerra en Siria. Ya que una insurgencia exitosa o duradera generalmente sólo surge cuando los movimientos están arraigados en sus bases y tienen cierto grado de legitimidad y apoyo, la forma en que los movimientos se movilizan en las ciudades merece un análisis más exhaustivo. Este artículo ha demostrado que la

dicho apoyo desde las bases puede ser derivado de prácticas incipientes de gobernanza rebelde, y por lo tanto, la manera en la que los movimientos rebeldes se involucran con sus bases y les brindan gobernanza debe continuar tomándose seriamente como un eje de investigación académico.

Sin embargo, no se debe subestimar la dificultad de la insurgencia urbana, y en consecuencia limitando la generalización de los hallazgos de este artículo. A pesar del impacto político de la campaña urbana del M-19 y de las fuertes bases que estableció en las ciudades, una vez que el gobierno dirigió su poder militar hacia el movimiento, sus militantes fueron en gran medida obligados a retirarse a una clandestinidad más profunda o a sus frentes rurales. Incluso, aunque su campaña se adhirió estrechamente al modelo revolucionario urbano: clandestinidad entre una población de apoyo, viviendo separados, pero luchando juntos, coordinados con una campaña de guerrilla rural (Guillén, 1973, pp. 240-41) el pico de la movilización urbana del M-19 fue efímero. A pesar de los esfuerzos de seguridad y la compartimentación, los esfuerzos contrainsurgentes lograron infiltrarse e interrumpir las unidades y redes de apoyo del M-19, dando lugar a detenciones masivas. Los sospechosos detenidos fueron torturados rutinariamente por la seguridad colombiana y aunque algunos detenidos intentaron "aguantar" al menos durante unos días antes de "romperse", para dar tiempo a sus camaradas a salir de las casas seguras, estas medidas socavaron las estructuras urbanas del M-19 e intimidaron a sus partidarios potenciales (Ver Mariño Vargas, 2019; Vásquez Perdomo, 2005, 134-35). Pero el M-19 evitó la destrucción de sus antecesores urbanos en Uruguay y Argentina porque cuando las condiciones para la movilización urbana se deterioraron, sus militantes pudieron huir a la relativa seguridad de los frentes rurales. En consecuencia, para que una campaña urbana tenga éxito, pareciera depender

de tener un sistema rural paralelo (Guillén, 1973, p. 244). Esta es también, probablemente, la razón por la que el M-19 no se separó ideológicamente de su base, a diferencia del algunos de los casos abordados en la literatura sobre movimientos sociales (Della Porta, 1995, 132–33, Della Porta, 2013, 204–35; Zwerman, Steinhoff y della Porta, 2000, 95), donde la clandestinidad era el *refugio* del Estado, un destino, en lugar de, como en el caso del M-19, una parada en el camino hacia una insurgencia más amplia.

Los hallazgos del artículo sugieren posibles vías para futuras investigaciones, notablemente una evaluación más detallada de los vínculos entre lo urbano y lo rural y las unidades y redes de apoyo, y una comparación más explícita entre patrones de creación de vínculos sociales en entornos urbanos y rurales y, si ante la ausencia de restricciones clandestinas, la creación de bases en las zonas rurales se desarrolla de manera diferente que en las ciudades. También exige un mayor análisis del legado de las bases insurgentes, en áreas donde el M-19 estuvo fuertemente arraigado, como, por ejemplo, en barrios como Nuevo Corinto. ¿Persistió allí su apoyo en la fase de posconflicto? Además, se podrían desenmarañar los vínculos sociales engendrados a través de las iniciativas de gobernanza del M-19 y otras desarrolladas a través de familias y relaciones políticas preexistentes. Finalmente, las comparaciones sobre la dinámica espacial de la construcción de sus bases merecerían ser contrastadas con las de otros grupos urbanos como los Tupamaros y Montoneros, y grupos que aunaron las movilizaciones urbanas-rurales tal y como el IRA en el Norte de Irlanda y tanto la conocida lucha anticolonial como la posterior guerra civil en Argelia.

Declaración de intereses

No hay conflictos de intereses.

Agradecimientos

Este proyecto ha recibido financiación del Programa de investigación e innovación Horizon 2020 en el marco del programa Marie Skłodowska-Curie, acuerdo de subvención nº 101024078.

Apéndice 1

Número	Nombre	Descripción del/la entrevistado/a
1	Hipólito	Comandante masculino M-19 con experiencia en movilización urbana en Bogotá y Cali y en el área rural.
2	-	Comandante masculino del M-19 en zonas rurales
3	A Navarro Wolf	Hombre M-19 Alto comandante en zonas urbanas y rurales
4	ME Vásquez Perdomo	Mujer miembro fundadora y comandante del M-19 y con experiencia en movilización urbana y rural
5	-	Mujer militante urbana del M-19
6	-	Comandante masculino M-19 en estructura urbana en Bogotá
7	-	Militante senior masculino del M-19 activo en estructuras tanto urbanas como rurales.
8	-	Militante femenina del M-19 en la estructura urbana de Cali
9	-	Militante masculino del M-19 en estructuras rurales
10	-	Militante masculino del M-19 en la estructura urbana de Cali
11	-	Militante masculino del EPL

Referencias

- Ahmad, E. (1982). Revolutionary warfare and counterinsurgency. In G. Chaliand (Ed.), *Guerrilla strategies: An historical anthology from the long march to Afghanistan*. Berkeley, Calif: University of California Press.
- Alternativa. (1977). El Secuestro de Ferreira: Lo Que Buscaba El M-19. Alternativa. (Accessed 12 September 1977).
- Anders, T. (2020). Territorial control in civil wars: Theory and measurement using machine learning. *Journal of Peace Research*, 57(6), 701–714. <https://doi.org/10.1177/0022343320959687>
- Arjona, A. (2016). *Rebelocracy*. Cambridge, U.K. ; New York, NY: Cambridge University Press.
- Arjona, A., Kasfir, N., & Mampilly, Z. C. (Eds.). (2015). *Rebel governance in civil war*. Cambridge ; New York, NY ; Melbourne, VIC ; Delhi ; Singapore: Cambridge University Press.
- Bell, J. B. (1990). Revolutionary dynamics: The inherent inefficiency of the underground. *Terrorism and Political Violence*, 2(2), 193–211. <https://doi.org/10.1080/09546559008427061>

“Boletín Internacional: Pizarro Candidato Presidencial.”. (2014). Oiga Hermano, Hermana, 2014 <http://www.oigahermanohermana.org/article-boletin-internacional-pizarro-candidato-presidencial-125142711.html> , 2014

Boudon, L. (2001). Colombia's M-19 democratic alliance: A case study in new-party self-destruction. *Latin American Perspectives*, 28(1), 73–92. <https://doi.org/10.1177/0094582X0102800105>

Boulanger Martel, S. P. (2022a). ¡Zapatero, a tus zapatos! Explaining the social engagement of M-19 ex-combatants in education and social work institutions in Colombia. *Third World Quarterly*, 43(4), 760–778. <https://doi.org/10.1080/01436597.2021.2022979>

Boulanger Martel, S. P. (2022b). Rebel Bricoleurs? Brokerage, Institutional Bricolage and Operational Capacity in the Formation of M-19 in Colombia. In Conference paper presented at CRS Annual Conference. Belfast.

Brathwaite, K. J. H., & Konaev, M. (2019). War in the city: Urban ethnic geography and combat effectiveness. *Journal of Strategic Studies*, 1–36. <https://doi.org/10.1080/01402390.2019.1672159>. October.

Breslawski, J. (2021). The social terrain of rebel held territory. *Journal of Conflict Resolution*, 65(2–3), 453–479. <https://doi.org/10.1177/0022002720951857>

Brum, P. (2014). Revisiting urban guerrillas: Armed propaganda and the insurgency of Uruguay's MLN-Tupamaros, 1969–70. *Studies in Conflict & Terrorism*, 37(5), 387–404. <https://doi.org/10.1080/1057610X.2014.893403>

Chernick, M. W., & Jimenez, M. F. (1993). Popular liberalism, radical democracy, and marxism: Leftist politics in contemporary Colombia, 1974-1991. In B. Carr, & S. Ellner (Eds.), *The Latin American left: From the fall of allende to perestroika* (Vols. 61–83). London: Latin America Bureau.

Crenshaw, M. (1981). The causes of terrorism. *Comparative Politics*, 13(4), 379–399. <https://doi.org/10.2307/421717>

Della Porta, D. (1988). Recruitment processes in clandestine organizations: Italian left-wing terrorism. In B. Klandermans, Greenwich, & Conn (Eds.), *From structure to action: Comparing social movement research across cultures*. JAI Press.

Della Porta, D. (1995). *Social movements, political violence, and the state: A comparative analysis of Italy and Germany*. Cambridge [England]; New York: Cambridge University Press.

Della Porta, D. (2013). *Clandestine political violence. Cambridge studies in contentious politics*. New York, NY: Cambridge University Press.

Demetriou, C. (2007). Political violence and legitimation: The episode of colonial Cyprus. *Qualitative Sociology*, 30(2), 171–193. <https://doi.org/10.1007/s11133-007-9060-2>

El Espectador. (2014). Reabren caso de la masacre de la leche del M-19. *El Espectador*. December 12, 2014 <https://www.elespectador.com/judicial/reabren-caso-de-la-masacre-de-la-leche-del-m-19-article-532855/>.

Feldman, A. (1991). *Formations of violence: The narrative of the Body and political terror in northern Ireland*. Chicago; London: University of Chicago Press.

Finkel, E. (2015). *The phoenix effect of state repression: Jewish resistance during the*

Holocaust. *American Political Science Review*, 109(2), 339–353.

Florez-Morris, M. (2007). Joining guerrilla groups in Colombia: Individual motivations and processes for entering a violent organization. *Studies in Conflict & Terrorism*, 30(7), 615–634. <https://doi.org/10.1080/10576100701385958>

García Durán, M., Loewenherz, V. G., & Hormaza, O. P. (2008). The M-19's journey from armed struggle to democratic politics. Berghof Series. *Resistance/Liberation Movements and Transition to Politics*.

Giáp, V. N. (1970). *The military art of People's war: Selected writings of general Vo Nguyen Giap*. New York: Monthly Review Press.

Gillespie, R. (1980). A critique of the urban guerrilla: Argentina, Uruguay and Brazil. *Journal of Conflict Studies*, 1(2).

Grabe Loewenherz, V. (2000). *Razones de vida*. Bogotá: Planeta.

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure: The problem of embeddedness. *American Journal of Sociology*, 91(3), 481–510.

Guáqueta, A. (2007). The way back in: Reintegrating illegal armed groups in Colombia then and now. *Conflict, Security and Development*, 7(3), 417–456. <https://doi.org/10.1080/14678800701556545>

Guevara, C. (2002). *Guerrilla warfare*. Lanham (MD): Rowman & Littlefield Publishers.

Guillén, A. (1973). *Philosophy of the urban guerilla*. New York: Morrow & Co.

Gutiérrez Danton, J. A. (2022). Rebel Governance as State-Building? Discussing the FARC-EP's Governance Practices in Southern Colombia. *Partecipazione e Conflitto*, 15(1), 17–36.

Hobsbawm, E. J. (1994). *Revolutionaries: Contemporary essays* (Phoenix).

Holguín Pedroza, J. A. (2014). *Militancia Urbana y Accionar Colectivo Del M-19 En Cali, 1974-1985. Cauca: Un Enfoque Teóricamente Situado*'.

Jackson, A. (2018). *Life under the Taliban shadow government*. Overseas Development Institute. <https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/resource-documents/12269.pdf>.

Jentzsch, C., & Masullo, J. (2022). Violent or non-violent action? Wartime civilian resistance in Colombia and Mozambique. *Political Geography*, 99(November), 102761. <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2022.102761>

Jimeno, A. M. (2022). Gustavo Petro, clandestino en Zipaquirá. *Cambio Colombia* (blog). May 27, 2022 <https://cambiocolombia.com/articulo/poder/gustavo-petro-clandestino-en-zipaquirá>.

Jiménez Ricárdez, R. (1986). Entrevista Antonio Navarro Wolff M-19: Paz y Guerra en Colombia. *Cuadernos Políticos*. March 1986.

Kalyvas, S. N. (2006). *The logic of violence in civil war*. Cambridge ; New York: Cambridge University Press.

Kasfir, N. (2005). Guerrillas and civilian participation: The national resistance army in Uganda, 1981-86. *The Journal of Modern African Studies*, 43(2), 271–296.

Kasfir, N. (2015). Rebel governance - constructing a field of inquiry: Definitions, scope, patterns, order, causes. In A. Arjona (Ed.), *Nelson Kasfir, and Zachariah Cherian Mampilly: Vols. 21–46. Rebel governance in civil war*. New York: Cambridge University Press.

Kasfir, N., Frerks, G., & Terpstra, N. (2017). Introduction: Armed groups and multi-layered governance. *Civil Wars*, 19(3), 257–278. <https://doi.org/10.1080/13698249.2017.1419611>

Lara, P. (2002). *Siembra vientos y recogerás tempestades: La historia del M-19, sus protagonistas y sus destinos*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiana.

Le Blanc, J. (2012). Political violence in Latin America: A cross-case comparison of the urban insurgency campaigns of Montoneros, M-19 and FSLN in a historical perspective. Newcastle: Cambridge Scholars.

Le Blanc, J. (2013). The urban environment and its influences on insurgent campaigns. *Terrorism and Political Violence*, 25(5), 798–819. <https://doi.org/10.1080/09546553.2012.700656>

Ledwidge, F. (2017). *Rebel law: Insurgents, courts and justice in modern conflict*. London: Hurst & Company.

M-19. (1976). Que El Pueblo Decida. M-19 (blog). <http://www.oigahermanohermana.org/article-que-el-pueblo-decida-123768431.html>. (Accessed 15 February 1976).

M-19. (1977). Carta Nacional No. 1. El Blog de Oiga Hermano, Hermana (blog), 1977 <http://www.oigahermanohermana.org/article-documentos-en-la-historia-del-m-19-cartanacional-124384567.html>.

M-19. (1978). Concepcion y Estructura de La organizacion politico militar del M-19. Sexta Conferencia Nacional.

M-19. (1983). Reunión de La Direccion Nacional Conclusiones Febrero de 1983.

Malthaner, S. (2011). *Mobilizing the faithful: Militant Islamist groups and their constituencies*. Frankfurt: Campus: University Presses.

Malthaner, S. (2014). Fieldwork in the context of violent conflict and authoritarian regimes. In D. della Porta (Ed.), pp. 173–95. *Methodological practices in social movement research*. Oxford: Oxford University Press.

Malthaner, S., & Malešević, S. (2022). Violence, legitimacy, and control: The dynamics of rebel rule. *Partecipazione e Conflitto*, 15(1), 1–16.

Mampilly, Z. C. (2011). *Rebel rulers: Insurgent governance and civilian life during war*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Mampilly, Z., & Stewart, M. A. (2021). A typology of rebel political institutional arrangements. *Journal of Conflict Resolution*, 65(1), 15–45. <https://doi.org/10.1177/0022002720935642>

Mao Tse-Tung. (2015). *Mao Tse-Tung on guerrilla warfare*. Pickle Partners Publishing.

Marighella, C. (2002). *Mini-manual of the urban guerrilla*. Montreal, QC; Toronto, ON: Abraham Guillen Press.

Mariño Vargas, F. A. (2019). *Y Después de Todo... El Perdón Sobre La Vida, La Tortura y Seguir Viviendo*. Bogotá Colombia: Desde Abajo.

Massey, D. B. (1995). *Spatial divisions of labor: Social structures and the geography of production*. New York: Routledge.

McAdam, D. (1986). Recruitment to high-risk activism: The case of freedom summer. *American Journal of Sociology*, 92(1), 64–90.

McCauley, C., & Moskaleiko, S. (2017). *Friction how conflict radicalizes them and Us (Revised and Expanded Edition)*. Oxford: Oxford University Press.

- McColl, R. W. (1969). The insurgent state: Territorial bases of revolution. *Annals of the Association of American Geographers*, 59(4), 613–631. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8306.1969.tb01803.x>
- McCormick, G. H., & Owen, G. (2000). Security and coordination in a clandestine organization. *Mathematical and Computer Modelling*, 31(6), 175–192. [https://doi.org/10.1016/S0895-7177\(00\)00050-9](https://doi.org/10.1016/S0895-7177(00)00050-9)
- Medellín P´erez, I. (2018). *La gente del sancocho nacional*. Bogotá: Editorial Universidad del Rosario.
- Miller-Idriss, C.. The extreme gone mainstream: Commercialization and far right youth culture in Germany. <http://www.vlebooks.com/vleweb/product/openreader?id=none&isbn=9781400888931>.
- Moriarty, J. T. (2010). The vanguard’s dilemma: Understanding and exploiting insurgent strategies. *Small Wars and Insurgencies*, 21(3), 476–497. <https://doi.org/10.1080/09592318.2010.505479>
- ´O Dochartaigh, N. (2013). Bounded by violence: Institutionalizing local territories in the North of Ireland. *Nationalism & Ethnic Politics*, 19(1), 119–139. <https://doi.org/10.1080/13537113.2013.763499>
- ´O Dochartaigh, N. (2022). The rules of hijacking: Coercion and legitimacy in the ‘urban Statelets’ of the IRA. *PARTECIPAZIONE E CONFLITTO*, 15(1), 107–120.
- O’Connor, F. (2021). *Understanding insurgency: Popular support for the PKK in Turkey*. Cambridge: Cambridge University Press.
- O’Connor, F. (2022). Routinised insurgent space: Spatial dimensions of insurgent-civilian relations and support.” workshop presented at the the margins of insurgent control: Spaces of governance. Wageningen University and Research.
- O’Connor, F., & Meer, J. (2021). The M-19’s ideological Sancocho: The reconciliation of socialism and Colombian nationalism. *Small Wars and Insurgencies*, 32(1), 127–151. <https://doi.org/10.1080/09592318.2020.1829861>
- O’Connor, F., & Oikonomakis, L. (2015). Preconflict mobilization strategies and urban-rural transition: The cases of the PKK and the FLN/EZLN. *Mobilization: An International Quarterly*, 20(3), 379–399. <https://doi.org/10.17813/1086-671X-20-3-379>
- Parkinson, S. E. (2013). Organizing rebellion: Rethinking high-risk mobilization and social networks in war. *American Political Science Review*, 107(3), 418–432.
- Parkinson, S. E., & Zaks, S. (2018). Militant and rebel organization(s). *Comparative Politics*, 50(2), 271–293. <https://doi.org/10.5129/001041518822263610>
- Parra, A. (1987). “A POLITICA Y LOS AFECTOS.”. *Gente Eme*, 1987 <http://genteeme.blogspot.com/2017/04/la-politica-y-los-afectos-afranio-parra.html>, 1987.
- Passy, F. (2001). Socialization, connection, and the structure/agency gap: A specification of the impact of networks on participation in social movements. *Mobilization: An International Quarterly*, 6(2), 173–192. <https://doi.org/10.17813/mai.6.2.v6u4wg67x87w943h>
- Patiño, O. (2017). *Historia privada de la Violencia: La crisis colombiana de mediados del siglo XX contada por los descendientes de sus protagonistas*.
- P´ecaut, D. (2019). *Modernización y enfrentamientos armados en la Colombia del siglo XX*.

Translated by Alberto Valencia Gutiérrez (1st ed.). Programa Editorial Universidad del Valle. <https://doi.org/10.2307/j.ctv14jx75s>

Pizarro, Leongómez, & E. (2001). *Insurgencia sin revolución: La guerrilla en Colombia en una perspectiva comparada*. Bogotá: Tercer Mundo Editores.

Ramírez, S., & Restrepo, L. A. (1988). *Actores en conflicto por la paz: El proceso de paz durante el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986)*. Bogotá: CINEP : Siglo Veintiuno.

Rubin, M. A. (2019). Rebel territorial control and civilian collective action in civil war: Evidence from the communist insurgency in the Philippines. *Journal of Conflict Resolution*, Article 0022002719863844. <https://doi.org/10.1177/0022002719863844>. July.

Schlichte, K., & Schneckener, U. (2015). Armed groups and the politics of legitimacy. *Civil Wars*, 17(4), 409–424. <https://doi.org/10.1080/13698249.2015.1115573>

Sluka, J. A. (1989). *Hearts and minds, water and fish: Support for the IRA and INLA in a northern Ireland Ghetto*. Greenwich, Conn.: JAI Press.

Söderström, J. (2016). The resilient, the remobilized and the removed: Party mobilization among former M19 combatants. *Civil Wars*, 18(2), 214–233. <https://doi.org/10.1080/13698249.2016.1205565>

Staniland, P. (2010). Cities on fire: Social mobilization, state policy, and urban insurgency. *Comparative Political Studies*, 43(12), 1623–1649.

Staniland, P. (2014). *Networks of rebellion: Explaining insurgent cohesion and collapse*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.

Stewart, M. A. (2018). Civil war as state-making: Strategic governance in civil war. *International Organization*, 72(1), 205–226. <https://doi.org/10.1017/S0020818317000418>

Stewart, M. A. (2021). *Governing for Revolution: Social Transformation in Civil War*. Cambridge: Cambridge University Press.

Stewart, M. A., & Liou, Y. (2016). Do good borders make good rebels? Territorial control and civilian casualties. *The Journal of Politics*, 79(1), 284–301. <https://doi.org/10.1086/688699>

Thurber, C. (2019). Social ties and the strategy of civil resistance. *International Studies Quarterly*, 63(4), 974–986. <https://doi.org/10.1093/isq/sqz049>

Tilly, C. (2003). *Collective violence*. Cambridge; New York: Cambridge University Press.

Zwerman, G., Steinhoff, & della Porta, D. (2000). Disappearing social movements: Clandestinity in the cycle of new left protest in the U.S., Japan, Germany, and Italy. *Mobilization: An International Quarterly*, 5(1), 85–104. <https://doi.org/10.17813/mai.5.1.0w068105721660n0>

Valencia, E. (2009). “La Toma de Macondo”. *Ciudad Vaga*. <https://ciudadvaga.univalle.edu.co/reportajes/la-toma-de-macondo/> (Accessed 17 October 2019).

Vásquez Perdomo, M. E. (2005). *My Life as a Colombian Revolutionary: Reflections of a Former Guerrillero*. Philadelphia: Temple University Press.

Villamizar, D. (2002). *Jaime Bateman Biografía de Un Revolucionario*. Bogotá: Editorial Planeta Colombiano.

Villamizar, D. (2017). *Las guerrillas en Colombia: Una historia desde los orígenes hasta los confines*.

- Villamizar, D. (2019). Colombia: 70 Years of guerrilla war. In D. Kruijt, E. R. Trist'an, & A. M. 'Alvarez (Eds.), *Latin American guerrilla movements: Origins, evolution, outcomes* (Vols. 168–81). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429244063>.
- Waterman, A. (2022). The shadow of 'the Boys:' rebel governance without territorial control in Assam's ULFA insurgency. *Small Wars and Insurgencies*, 0(0), 1–26. <https://doi.org/10.1080/09592318.2022.2120324>
- Welsh, B. (2022). Your space or mine? Competition, control, and the spatial profile of militant violence against civilians. *Journal of Peace Research*. , Article 00223433221091597. <https://doi.org/10.1177/00223433221091597>. October.
- White, R. W., & White, T. F. (1991). Revolution in the city: On the resources of urban guerrillas. *Terrorism and Political Violence*, 3(4), 100–132. <https://doi.org/10.1080/09546559108427129>
- Wickham-Crowley, T. (1990). Terror and guerrilla warfare in Latin America, 1956–1970. *Comparative Studies in Society and History*, 32(2), 201–237. <https://doi.org/10.1017/S0010417500016467>
- Wickham-Crowley, & T, . (1993). *Guerrillas and revolution in Latin America: A comparative study of insurgents and regimes since 1956* (1st Princeton). Princeton, N.J: Princeton University Press.
- Wiktorowicz, Q. (2005). *Radical Islam rising: Muslim extremism in the west*. Rowman & Littlefield.
- Wood, E. J. (2008). The social processes of civil war: The wartime transformation of social networks. *Annual Review of Political Science*, 11(1), 539–561.
- Worrall, J. (2017). (Re-)Emergent orders: Understanding the negotiation(s) of rebel governance. *Small Wars and Insurgencies*, 28(4–5), 709–733. <https://doi.org/10.1080/09592318.2017.1322336>